

SEGURIDAD ANÁLISIS

¿Escándalos en Ejército podrían afectar sociedad con la Otan?

En la última medición, la imagen favorable del Ejército cayó al 48%. No pasaba hacía 20 años.

Por RICARDO MONSALVE GAVIRIA

En el último año, el Ejército colombiano ha estado en el ojo del huracán por el accionar de algunos de sus integrantes, lo que afecta directamente la imagen favorable que, por muchos años, ha tenido una de las instituciones más importantes del país en temas de seguridad.

Casos de corrupción de altos oficiales, interceptaciones y perfilamientos a personas ajenas al conflicto armado, casos de violaciones sexuales a menores de edad y homicidios de campesinos ajenos a grupos ilegales, hacen parte de algunos hechos ocurridos en los últimos meses, y aunque han generado una reacción de esa misma institución con el fin de buscar justicia, transparencia y evitar nuevos actos similares, estos podrían llegar a tener un efecto con las alianzas y sociedades que tiene el país con organismos internacionales como la Otan.

En mayo de 2018, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan), oficializó a Colombia como su único socio global en América Latina, muy diferente a ser miembro de esa alianza político-militar. Desde ese entonces el país, entre otros beneficios, logró acceder a diversos planes, programas, capacitaciones y entrenamientos para los integrantes de las Fuerzas Armadas por parte de los países miembros.

¿Puede afectar?

Los analistas consultados por este diario coinciden en que pueden presentarse repercusiones, como pérdida de beneficios, siempre y cuando Ejército o Gobierno no hagan correcciones necesarias y no



Para ingresar a la OTAN, los países deben presentar planes que incluyan asuntos económicos, de defensa, de recursos y de legalidad y transparencia en sus actividades. FOTO ARCHIVO

exista justicia en casos relacionados con actividades ilegales.

“Colombia tiene prestigio en el plano militar ante la Otan y si estos temas no logran ser bien manejados por el Ministerio de Defensa y se conocen más casos en los que se comprometan actos contra civiles, podrían darse consecuencias en la sociedad que existe”, afirma el docente titular de seguridad y defensa na-

cional de la Universidad Externado, *Jairo Libreros*.

Fernando Cocho Pérez, analista de Inteligencia, explica que sí podría tener algún tipo de repercusión por los hechos conocidos, “pero creo que como todo país que ha pasado un proceso de pacificación, tiene un tiempo de cadencia para evaluar y depurar las responsabilidades políticas y militares en cada caso”.



LA PRUEBA

MEDIDAS DEL EJÉRCITO POR ESCÁNDALOS

Desde el Ministerio de Defensa, así como desde el propio Ejército se han hecho publicas diferentes medidas en cada uno de los escándalos que han ocurrido en los últimos meses. Las acciones de la institución han ido desde traslados y retiro de oficiales involucrados en hechos presuntamente ilegales, hasta la entrega a la justicia ordinaria de los uniformados implicados en casos de abusos sexuales contra menores de edad. Para el comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, “el respeto y protección de los derechos humanos es una política institucional absoluta, con énfasis en la protección especial de los menores de edad, en la que prevalecen sus derechos”.

Recuerda Cocho Pérez que países miembros de esa organización ejerciendo como Cascos Azules de la ONU, también han tenido casos de abusos sexuales, sobornos o desvío de fondos de ayuda humanitaria para su propio beneficio.

No hay riesgo

Por su parte, *Mauricio Jaramillo*, docente de la facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la U. del Rosario, no cree que el estatus con la Otan, como socio y no miembro, dé para sanciones contra Colombia.

“Lo que sí debe haber es una preocupación dentro de la Otan porque Colombia, dentro de los compromisos que alcanzó en este acuerdo de asociación, es precisamente la difusión de los derechos humanos en el seno de las Fuerzas Militares y dentro de este acápite tiene mucha relevancia el enfoque de género. Puede afectar el prestigio, pero no para sanciones”.

Detalla el docente que hay que esperar que hace la justicia. “Colombia debe estar esperando que se administre justicia y que se haga un proceso de transparencia y castigo a los culpables, se podría mostrar

eso como carta a Bruselas y también a Estados Unidos”.

Andrés Macías, docente en la Universidad Externado y experto en seguridad y defensa, asegura que la figura de socio de Colombia con la OTAN no está en riesgo, sobre todo después de la decisión del Ministerio de Defensa de retirar el nombre del general (r) *Nicacio Martínez* como posible agregado militar ante esa organización. “Esa movida seguramente buscó enviar un mensaje de prudencia y cautela a la comunidad internacional”.

Macías incluso va más allá, y añade que contrario a poner en riesgo, la sociedad con la Otan genera es una obligación más al Estado colombiano “esta vez desde el ámbito internacional, para revisar y fortalecer los instrumentos y canales de supervisión, investigación y sanción de conductas irregulares e ilegales por parte de los uniformados” ■



EN DEFINITIVA

Escándalos del Ejército podrían alterar la sociedad que Colombia tiene con la organización político militar, OTAN. Expertos coinciden en que el país debe demostrar que hay justicia y transparencia.

Andrés Felipe Arias reitera impugnación de condena

Por LEONARDO BOTERO FERNÁNDEZ

Dos meses después de la decisión de la Corte Constitucional que le amparó su derecho al debido proceso, el exministro de Agricultura *Andrés Felipe Arias* reiteró la impugnación que presentó en diciembre de 2018 de la decisión en su contra de 17 años y 5 meses de prisión por actos de corrupción en 2010.

Fue el mismo tribunal el que en 2014 condenó al exfuncionario por los delitos de peculado

por apropiación y celebración indebida de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Desde los primeros resultados judiciales en su contra, Arias insistió en que se le estaba vulnerando su derecho al debido proceso, al no permitírsele impugnar la decisión que lo condenó por las irregularidades en el manejo del programa de subsidios Agro Ingreso Seguro.

Estando aún en EE. UU., a donde viajó en 2014 antes de que la Corte Suprema emitiera su condena, inició la batalla

17

años y 5 meses es el tiempo de la condena contra Andrés Felipe Arias.

legal para que se le concediera la impugnación. En varias ocasiones, sin embargo, la Corte Suprema negó las solicitudes.

No fue sino hasta mayo de este año, cuando ya cumplía un año de estar recluso en la

Escuela de Caballería en Bogotá, que el caso tuvo un giro importante a favor de Arias.

En ese momento, la Corte Constitucional estudió una tutela interpuesta por la defensa en la que se pedía la protección de los derechos de Arias al debido proceso e impugnación de la sentencia condenatoria y del principio de favorabilidad.

La decisión de la Corte Constitucional resultó en la misma línea de lo que dijo, en 2018, el Comité de Derechos Humanos de la Organi-

zación de Naciones Unidas (ONU), cuando señaló que no garantizarle el derecho a la doble instancia a Arias violaba el Pacto Internacional de Derechos Políticos.

El proceso continuará, entonces, con Arias todavía recluso, pues la Corte Constitucional indicó que “el tutelante no recobrará la libertad con ocasión de esta decisión, pues la impugnación será devolutiva, lo que quiere decir que la sentencia condenatoria seguirá surtiendo sus efectos hasta tanto se resuelva la impugnación” ■